

Expediente: **6697/17**

Carátula: **BANCO SANTANDER RIO S.A. C/ DIAZ VICTOR HUGO S/ SECUESTRO PRENDARIO**

Unidad Judicial: **OFICINA DE GESTIÓN ASOCIADA EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES N° 3**

Tipo Actuación: **SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS**

Fecha Depósito: **11/10/2024 - 00:00**

**Notificación depositada en el/los domicilio/s digital/es:**

90000000000 - DIAZ, VICTOR HUGO-DEMANDADO

20305884643 - BANCO SANTANDER RIO S.A., -ACTOR

20305884643 - CORREA, HERNAN GUILLERMO-POR DERECHO PROPIO

20286815848 - NUÑEZ, PAULA ANDREA-TERCERO

20286815848 - PETROS, GUILLERMO-POR DERECHO PROPIO

## **PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN**

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

Oficina de Gestión Asociada en Documentos y Locaciones N° 3

ACTUACIONES N°: 6697/17



H106038127410

### **Juzgado Civil en Documentos y Locaciones III**

**JUICIO: BANCO SANTANDER RIO S.A. c/ DIAZ VICTOR HUGO s/ SECUESTRO PRENDARIO.-  
EXPTE N°6697/17.-**

**San Miguel de Tucumán, 10 de Octubre de 2024.-**

#### **AUTOS Y VISTOS:**

Para resolver los planteos de caducidad de instancia y de tercerías, en estos autos caratulados: "BANCO SANTANDER RIO S.A. c/ DIAZ VICTOR HUGO s/ SECUESTRO PRENDARIO", y

#### **CONSIDERANDO:**

I.- Que mediante presentación de fecha 29/08/2024 (hs. 10:34), la tercera Paula Andrea Nuñez - DNI N° 22.567.724, con el patrocinio letrado del Dr. Guillermo Petros, se apersona, constituye domicilio procesal digital y plantea caducidad de instancia de estos autos, tercerías de dominio y de mejor derecho, solicitando consecuentemente el levantamiento de secuestro del bien objeto de autos, consistente en un rodado automotor Marca HONDA, Tipo Rural 5 puertas, Modelo CRV LX, Marca Motor HONDA, N° Motor K24Z91058422, Marca Chasis HONDA, N° Chasis 3HGRM3830CG600263, Año Fabricación 2012, Dominio LJO192.-

En cuanto a la caducidad de instancia, alega que siendo su primera presentación, la deduce en virtud de la inactividad del proceso evidenciada desde fecha 30/03/2021, en la que se registra la última actuación procesal que tuvo el expediente a consecuencia del escrito de la actora de fecha 23/02/2021, en el que pidió se reitere mandamiento de secuestro.-

Indica que desde esa fecha a esta parte, el juicio quedó totalmente abandonado y paralizado sin ningún acto impulsorio del mismo por parte de la actora, adjuntando Informe de Dominio Histórico del referido automotor emitido por la DNRPA (Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor), que da cuenta de que es la titular registral de la unidad automotor en cuestión, así como que en el referido informe adjuntado no surge ningún tipo de medida cautelar, medida judicial, inhibición, prenda, embargo, pedido de secuestro ni ningún tipo de interdicción o gravamen sobre el rodado de su propiedad. De igual manera, del informe adjuntado se desprende que posterior a la titularidad dominial del ejecutado de este proceso (Diaz Victor Hugo), el rodado fue transferido a dos personas mas en forma previa a la adquisición de su parte: desde el 30/08/2021 hasta el 30/11/2021 el titular dominial fue el Cuit/Cuil 20-45196790-9, Porcentaje de Titular 100%, Nombre: DILASCIO AYRTON - DNI. Nro: 45196790; y desde el 30/11/2021 hasta el 30/04/2024 el titular fue el Cuit/Cuil 27-37096790-9, Porcentaje de Titular 100%, Nombre: TOMAS ABASCAL MARIA PIA - DNI Nro: 37096790.-

Agrega que cuando compró el automotor, consultó en el Registro Automotor sobre su situación dominial y estaba limpio de todo, en condiciones, motivo por el cual lo compró, siendo que la situación en la que se encuentra su rodado la perjudica gravemente. Hace reserva de las acciones por daños y perjuicios en contra de quien corresponda.-

Respecto a la tercería de dominio y de mejor derecho impetrada, en contra de las partes de este proceso, aduce que como surge de la totalidad de la documentación adjuntada y los fundamentos dados, es la propietaria legal del rodado en cuestión y el mismo no registra ningún tipo de anotación o medida judicial o cautelar de ninguna naturaleza en el Registro Automotor y procede lo peticionado por expreso imperio de la ley, por haberse afectado su derecho de propiedad de raigambre constitucional, amparado en el art. 17 de nuestra carta magna, habiéndose violado al publicidad registral y toda la normativa conexas.-

Solicita se le haga entrega del rodado de su propiedad en carácter de depositaria judicial hasta tanto se resuelvan las cuestiones debatidas en autos ya que de lo contrario toda esta situación, le ocasiona un serio perjuicio al verse imposibilitada de usar su automotor.-

Relata que es titular dominial del rodado dominio LJO192, y que en fecha 17/08/2024, en la ciudad de Salta en la que reside, en un control policial de rutina en la via pública, circulando a bordo de su automotor, luego de hacerles un control de alcoholemia que dio negativo, la policía consultó el sistema SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales) informándoles que el rodado se encontraba afectado con un pedido de secuestro dictado en este juicio y se procedió al secuestro del mismo, con los consiguientes daños y perjuicios que dicha situación les acarrea junto a su esposo al tratarse del único medio de movilidad que usan para realizar las actividades cotidianas familiares y laborales.-

Manifiesta que el vehículo fue adquirido en el mes de noviembre del año 2023, y en ese momento realizaron averiguaciones pertinentes sobre la procedencia y legalidad del rodado por medio de informe de dominio solicitado por ante la DNRPA, donde se daba cuenta que sobre el vehículo no pesaba ningún tipo de impedimento ni medida cautelar de naturaleza alguna, encontrándose así el rodado en condiciones para la operación de compraventa que concretaron.-

Expresa que en Abril de 2024, realizó la correspondiente transferencia de dominio a su nombre sin ningún tipo de impedimento, como se acredita con la documentación pertinente que adjunta, y que durante todo el tiempo que tuvo el rodado en su poder, jamás tuvo inconveniente alguno desplazándose libremente por todo el territorio del país e incluso saliendo del mismo de vacaciones, por lo que esta situación le llama poderosamente la atención, habiéndola perjudicado gravemente al

haberle secuestrado el único medio de movilidad adquirido con el fruto del esfuerzo de muchos años de trabajo.-

Menciona que es tercera adquirente de buena fe y a título oneroso, por lo que cualquier situación en la que se encontrara el rodado en cuestión en forma previa y que no se encontrara volcada e inscrita en el Registro Público pertinente (DNRPA), no le es oponible, además que se viola el principio de publicidad registral de los actos jurídicos para dar seguridad jurídica a los ciudadanos como en su caso donde compró un vehículo que se encontraba en perfectas condiciones de documentación, y hoy se encuentra privada de poder usar y disponer el mismo como propietaria que es.-

**II.-** Corrido el traslado de ley, la parte actora contesta en fecha 11/09/2024 (hs. 18:44), solicitando el rechazo del planteo formulado en virtud de que la incidentista no es parte en este proceso por no haber sido demandada, careciendo consecuentemente de legitimación pasiva, además de que su pedido de tercería carece de los recaudos exigidos en el código de forma.-

Agrega que conforme el art. 39 de la Ley 12.962, la parte deudora no puede intervenir en estos tipos de proceso, mucho menos aún una tercera que no es parte, y que en consecuencia, la incidentista debe ocurrir por la vía y forma que corresponda.-

Cita jurisprudencia que considera aplicable al caso y contesta la caducidad impetrada, con fundamento en que para que dicho instituto sea operativo hace falta la existencia de una instancia, que se promueve con la interposición de una demanda, lo cual no ocurre en la presente medida impetrada por su parte, tendiente a obtener la disposición del bien objeto de la prenda con registro, a los fines de efectuar el remate correspondiente, además de no haber incurrido en abandono del proceso o conducta omisiva alguna de su parte.-

Pone en conocimiento que su parte fue informada de que el rodado, se encontraba en poder de la incidentista de manera inmediatamente posterior al secuestro del bien.-

Concluye expresando que sin perjuicio de todo lo expuesto, y sin perjuicio que la deuda prendaria no ha sido cancelada, pero el rodado ya se encuentra transferido en cabeza de otro titular, presta conformidad con el levantamiento de captura a las fuerzas policiales (GENDARMERIA NACIONAL, POLICIA FEDERAL Y POLICIA DE TUCUMAN) y de seguridad, además de prestar conformidad con la entrega del rodado a la tercera incidentista, pero solicitando se rechace la presentación de la misma con expresa imposición de costas.-

**III.-** En fecha 25/09/2024 (hs. 12:06), emite dictamen la Sra. Agente Fiscal Civil y satisfechos los derechos fiscales correspondientes, en fecha 01/10/2024 se llaman autos para sentencia.-

Debiendo el Sentenciante resolver la cuestión traída a estudio, corresponde tratar los planteos impetrados.-

1) CADUCIDAD: El instituto de la caducidad representa la extinción de la instancia, requiriendo para su procedencia de cuatro requisitos: existencia de instancia, inactividad procesal tanto de las partes como del órgano jurisdiccional, transcurso de determinado período de tiempo establecido por la ley, y la resolución que así lo declare.-

Para dilucidar el planteo del caso particular, basta con considerar el tipo de trámite judicial ante el cual nos encontramos.-

Así, es del caso tener en cuenta que la disposición establecida en el artículo 39 de la ley 12.962, otorga la capacidad de solicitar judicialmente el secuestro de bienes que están sujetos a un contrato de prenda. Este procedimiento requiere que se presente un certificado que acredite la existencia de la prenda, lo que proporciona una base legal para la acción. Es importante resaltar que, en este contexto, el deudor no puede interponer ningún recurso en contra de esta solicitud, lo que limita sus opciones en términos de defensa.-

El carácter de este trámite es fundamental para entender su naturaleza. No se considera el inicio de un proceso de ejecución, sino que se trata de una acción que tiene como objetivo poner el bien a disposición del acreedor. Esto significa que el acreedor puede proceder con la venta del bien a través de una subasta pública, lo que le permite recuperar, al menos en parte, la deuda pendiente. La agilidad de este proceso es clave, ya que evita los largos procedimientos judiciales típicos de un juicio de ejecución.-

Por otro lado, es relevante señalar que, dado que este trámite no se clasifica como un juicio de ejecución, el deudor no se verá afectado por el régimen de caducidad de la instancia. Esto implica que no hay un límite de tiempo que restrinja el procedimiento, lo que está pensado para que el acreedor pueda recuperar sus activos. En resumen, esta normativa busca equilibrar los derechos de los acreedores con la situación del deudor, permitiendo una gestión más eficiente de las deudas garantizadas por bienes prendados.-

En igual sentido dictaminó la Sra. Agente Fiscal Civil, quien citó jurisprudencia que comparto y hago propia en el sentido que: "La citada norma (art. 39 de la ley 12.962) faculta a ciertas instituciones a requerir judicialmente el secuestro de los bienes prendados, con la presentación del certificado prendario, sin que el deudor pueda promover recurso alguno, ya que el trámite señalado no importa la iniciación de un proceso de ejecución, sino sólo poner el bien a disposición de la acreedora para que proceda a venderlo en subasta pública. Coincidente con ello se dijo "Debido a que el trámite no implica la iniciación de un juicio de ejecución, no le será aplicable el instituto de la caducidad de la instancia" (CCiv en Doc y Loc - Sala II. Sentencia N° 100, de fecha 26/03/2004).-

En consecuencia, el planteo de caducidad de instancia no resulta procedente, ya que estos autos se tratan a un trámite de secuestro prendario, que no se encuentra sometido a los efectos de la perención de instancia.-

2) TERCERIA. Se denomina tercería a la pretensión en cuya virtud una persona distinta a las partes intervinientes en un determinado proceso, reclama el levantamiento del embargo trabado en el mismo sobre un bien de su propiedad, o el pago preferencial de un crédito con el producido de la venta del bien embargado. El concepto enunciado comprende a las dos clases de tercería que admite el ordenamiento procesal, o sea a las de dominio (caso concreto que nos ocupa), y a la de mejor derecho (cfr. Lino Enrique Palacio, "Manual de Derecho Procesal Civil", Tomo I, Décima Edición actualizada, página 349 y ss.).-

La tercería de dominio debe fundarse en la propiedad de los bienes embargados, debiendo probar el tercerista, por constituir requisitos de forma, la verosimilitud del derecho en que se funda la misma, con instrumentos fehacientes o en forma sumarial; acompañando elementos de juicios que la avalen a los fines de la procedencia y viabilidad de su pretensión. Estas pruebas resultan indispensables para la admisibilidad de la tercería, y deben encontrarse corroboradas por hechos claros, precisos y concordantes, tendientes a crear la convicción del sentenciante, sobre la real y cierta existencia del derecho de dominio de los bienes en la persona del tercerista, y de la procedencia de lo solicitado.-

Entrando en el análisis de autos, la tercera Paula Andrea Nuñez, acompaña título de dominio del bien objeto de autos, consistente en un rodado automotor Marca HONDA, Tipo Rural 5 puertas, Modelo CRV LX, Marca Motor HONDA, N° Motor K24Z91058422, Marca Chasis HONDA, N° Chasis 3HGRM3830CG600263, Año Fabricación 2012, Dominio LJO192, el cual no ha sido desconocido, impugnado u observado por la parte actora. De igual manera, tengo en cuenta que el rodado se encontraba en uso y goce de la tercerista al momento de su secuestro por parte de las fuerzas de seguridad, lo que corrobora su carácter de propietaria el bien.-

Ahora bien, es fundamental considerar a la tercerista como una adquirente de buena fe en relación con el vehículo en cuestión, ya que la existencia de una prenda no cancelada no puede ser opuesta a su derecho de propiedad. Esto se debe a que, al momento de la transferencia del rodado, esta prenda no se encontraba registrada en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Por lo tanto, el vehículo estaba en condiciones legales para ser transferido sin inconvenientes, lo que protege al nuevo propietario de cualquier reclamación posterior relacionada con la deuda.-

Así, el tercero que adquiere un vehículo tiene el derecho de invocar su buena fe, siempre y cuando en el momento de la compra no tenga conocimiento de que el vendedor no es el legítimo propietario o que el vehículo está gravado con una prenda. Esta protección se sostiene mientras el registro no muestre información que contradiga la situación jurídica del bien. En caso de que existiera algún error o falta de información en el registro, como una fuga registral que impida conocer el verdadero estado jurídico del bien, el tercero no puede ser responsabilizado por el acreedor prendario. La ley establece claramente que el adquirente actúa bajo la premisa de que el bien está libre de gravámenes, siempre que haya seguido los procedimientos usuales para verificar la situación legal del vehículo, lo cual acontece en autos.-

La Ley 12.962, en su artículo 41, modificado por el Decreto Ley 6810/63 y posteriormente por el Decreto 897/95, refuerza esta protección al tercer adquirente. De acuerdo con esta normativa, el hecho de que la existencia de la prenda no haya sido conocida por el tercero, debido a circunstancias que escapan a su control, lo exime de responsabilidad. Este enfoque busca equilibrar las relaciones de confianza en las transacciones comerciales, permitiendo que aquellos que actúan de buena fe en la compra de bienes muebles, como los vehículos, puedan hacerlo sin temor a descubrir cargas ocultas que podrían comprometer su adquisición. Así, se fomenta un entorno de seguridad jurídica que beneficia tanto a los compradores como a los vendedores en el mercado automotor.-

En sentido coincidente, la jurisprudencia dijo: "Cabe tener al tercerista como adquirente de buena fe del rodado, resultando inoponible que la prenda constituida no fuera cancelada. Ello por cuanto aún de progresar la hipótesis de que el documento de cancelación fue falso, lo cierto es que al momento de la transferencia del vehículo dicha prenda figuraba como cancelada en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, y se encontraba en condiciones de ser legalmente transferido" ... "El tercero adquirente de un vehículo puede alegar su buena fe, siempre que ignore, en el momento de adquirir el bien, que el enajenante no es dueño o que el bien estaba pignorado, en tanto en el registro no conste ninguna de estas hipótesis. Así, si existe una fuga registral, la errónea aseveración sobre el estado jurídico del bien o en su caso la omisión de información respecto de la cosa objeto de una transacción, el tercer adquirente no puede ser perseguido por el acreedor prendario, de conformidad con la Ley 12962: 41 (modificado por Decreto ley 6810/63, texto ordenado por Decreto 897/95), pues la existencia de la prenda fue desconocida para aquél, por un hecho ajeno a su propia voluntad, habida cuenta que cumplimentó los requisitos normales o usuales para asegurarse la bondad del estado jurídico de la cosa adquirida. (R.A. Muguillo, "Régimen general de la prenda con registro, comentado, anotado y concordado", artículos 38 y 41 p. 206/211 y 225/230, ed.1984)" (NUÑEZ DEOTINO, ROBERTO s. TERCERIA DE DOMINIO en CITIBANK N.A.

vs. MAJKO, DARIO GUSTAVO M. s. SECUESTRO PRENDARIO /// CNCom. Sala D; 27/06/2012; Prosecretaría de Jurisprudencia de la CNCom.; RC J 9641/12).-

En consecuencia, cabe hacer lugar a la tercería de dominio deducida por la tercera Paula Andrea Nuñez, respecto del bien objeto del presente secuestro prendario, lo que así se resuelve.-

3) **LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO Y ENTREGA DEL BIEN.** En virtud de lo solicitado por la tercerista, concordante con la conformidad prestada por la parte actora al levantamiento del pedido de captura a las fuerzas policiales y de seguridad, como así también la conformidad prestada con la entrega del rodado a la Sra. Nuñez, considero corresponde hacer lugar a esos pedidos, lo que así se resuelve -sin perjuicio de derechos de terceros- en congruencia con lo considerado mas arriba.-

4) **COSTAS:** En virtud del principio objetivo de la derrota: costas de la caducidad se imponen a la tercera Paula Andrea Nuñez; costas de la tercería se imponen a la parte actora (art. 61 del CPCC).-

Por ello,

### **RESUELVO:**

**I) NO HACER LUGAR** al incidente de caducidad deducido en fecha 29/08/2024 (hs. 10:34), por la tercera Paula Andrea Nuñez - DNI N° 22.567.724, conforme lo considerado.-

**II) HACER LUGAR** a la Tercería de Dominio impetrada por Paula Andrea Nuñez - DNI N° 22.567.724 en su presentación de igual fecha y en consecuencia, **PROCEDASE** al levantamiento del secuestro y orden de captura del bien objeto del presente, consistente en un rodado automotor Marca HONDA, Tipo Rural 5 puertas, Modelo CRV LX, Marca Motor HONDA, N° Motor K24Z91058422, Marca Chasis HONDA, N° Chasis 3HG3RM3830CG600263, Año Fabricación 2012, Dominio LJO192, debiendo oficiarse a fin de que tome conocimiento de lo aquí resuelto, a GENDARMERIA NACIONAL, POLICIA FEDERAL Y POLICIA DE TUCUMAN, conforme lo considerado.-

**III) COSTAS:** de la **caducidad** planteada, se imponen a la tercerista vencida; de la **tercería** impetrada, se imponen a la parte actora en autos, como se considera (art. 61 del CPCC).-

**IV) RESERVAR** pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.-

**HAGASE SABER.-**

**DR. CARLOS RAÚL RIVAS**

**Juez en Documentos y Locaciones**

**de la Tercera Nominación**

RECR

**Actuación firmada en fecha 10/10/2024**

Certificado digital:

CN=RIVAS Carlos Raul, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20231177281

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.



<https://expediente-virtual.justucuman.gov.ar/expedientes/037b08f0-8574-11ef-b24a-57e251438a9a>



<https://expediente-virtual.justucuman.gov.ar/expedientes/05c44e10-8574-11ef-94ff-2149846b398d>